

Trama Política

**Boletín número 3 del mes de junio
del 2009.**

Año 3, número 102

Contenido.

Contenido.....	2
Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.	4
El éxito del combate al narcotráfico: uno de los retos para el nuevo sistema político.	4
La violencia, desde luego, afecta los procesos electorales.	4
El Presidente Calderón reclama mayor apoyo de Estados Unidos.	5
Pareciera concertarse una coordinación latinoamericana contra el crimen.	5
Muy delicadas revelaciones del Arzobispo de Durango.....	6
Más conexiones de políticos con narcotraficantes.....	6
Preocupantes relaciones entre guerrilleros y narcotraficantes.....	7
Escandalosa excarcelación de reos peligrosos.....	8
Se devela la corrupción de varios gobiernos mexicanos y su complicidad con el narcotráfico.....	8
¿Guardias blancas en México?	9
Crece el fantasma del abstencionismo.....	10
Sinaloa es tierra dominada por el narcotráfico.	10
La narcoguerrilla FARC tiene ramificaciones en México.....	11
El gobierno defiende su política de seguridad pública.	11
La corrupción de políticos y funcionarios de seguridad en Morelos.....	11
Las denuncias debieran sostenerse y afrontar sus consecuencias, para solucionar el problema de raíz.....	12
La discreción en los operativos en los Estados es necesaria, según Gobernación.	13
La lucha se contamina con planteamientos electorales.	13
El gobernador Leonel Godoy acepta el operativo, a regañadientes.....	13
El gobernador Leonel Godoy protestó.....	14
Cada vez es más evidente la complicidad de funcionarios públicos con el narcotráfico.	14
El Presidente Calderón ratifica su voluntad de combatir a los criminales.....	14
Se incrementa la cooperación con Colombia.....	15
Los operativos federales son necesarios.	15
La opinión pública apoya los operativos.	15
La eficacia de ministerio público y policías es deplorable.	16
Sube la resistencia de los gobernadores de la Oposición, a los operativos federales.....	16
El PRD, por lo que se puede apreciar, pretende mantenerse al margen de la lucha contra el narcotráfico.....	17
El tema de la infiltración del narcotráfico enfrenta a los partidos políticos.	18
También hay tensiones entre las fracciones parlamentarias.	18
Ante las evidencias de connivencia en los Estados, con el narcotráfico, algunos gobernadores parecieran escurrir bulto.	18
El narcotráfico pretende organizar grupos para defenderse mediante conflictos sociales inducidos.....	19
El PRI pretende endosar la responsabilidad del narcotráfico al PAN.	19
Pareciera que la intervención del Ejército es indispensable.	19
Pretenden acallar y atemorizar a los comunicadores, asesinandolos.....	20

El narcotráfico es un problema de Estado cuya solución requiere de la previa conciliación de la nación y de un liderazgo eficaz que la conduzca. 20
Claves del documento 23
Notas al final del documento 23

Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.

El éxito del combate al narcotráfico: uno de los retos para el nuevo sistema político.

La violencia, desde luego, afecta los procesos electorales.

De alguna manera, todo lo que ocurre se refleja en los procesos electorales, por lo que la violencia que está padeciendo el país como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico no puede quedar al margen, es imposible.

Lo que no resulta tan obvio es el modo cómo impacta a todos y cada uno de los actores: mandatarios de los tres Órdenes de gobierno, con el diferente matiz proporcionado por su pertenencia a un determinado partido; funcionarios que tienen algún contacto con la problemática debido a su trabajo, como ocurre con los agentes aduanales, los de migración, el Ejército, así como los elementos de seguridad y policía, los agentes del ministerio público y los jueces; miembros y directivos de los partidos políticos así como sus candidatos a los diversos puestos de elección popular; y la sociedad, que ha sido profundamente lastimada por los secuestros, los asaltos, los enfrentamientos cada día más frecuentes en pueblos y ciudades a todo lo ancho y largo de la República; como los empresarios víctimas de amenazas, chantajes y exacciones de toda índole, así como los profesionales de la comunicación que han sido especialmente golpeados tratando de esterilizar el ejercicio de su oficio, los ministros de las iglesias y en fin, todos, sin excepción, porque al parecer el fenómeno ha penetrado todos los intersticios y contaminado todos los cuerpos de la sociedad.

El impacto sobre el proceso electoral se concentra en aquellos que están directamente involucrados pero, finalmente, incide sobre los candidatos que van a ser votados, las diferentes instancias encargadas de la organización, vigilancia y garantía de las elecciones, y desde luego, todos los ciudadanos en edad de votar que deberán decidir si ejercen o no ese derecho que nace de una responsabilidad de participación en la vida democrática del país, y en qué sentido lo harán.

La democracia funciona __con todas sus posibilidades y también sus limitaciones__, cimentada en la participación ciudadana, y para lograrla de la manera más generalizada, responsable e ilustrada, todas las instituciones __partidos, autoridades, tribunales, leyes y normas, así como la sociedad civil organizada y los Medios de comunicación masiva__ deberían estar orientadas para abonar en ese sentido.

La confianza de la ciudadanía en el sistema democrático es una condición indispensable, y desafortunadamente ahora __independientemente del desasosiego generado por la incertidumbre económica y por las dudas acerca de la habilidad con la cual sea manejada la crisis que tiene una naturaleza global__ se han venido incrementando y consolidando cierta desconfianza y una crítica acerba a las autoridades y las instituciones, en parte justificadas porque todos los días se multiplican evidencias de una corrupción que pareciera pervertirlo todo, mostrando cínicamente complicidades y componendas, con la delincuencia organizada, en el seno de muchas de aquéllas.

La primera afectación, y quizás la más importante, de la violencia generada por la delincuencia organizada y su inevitable represión por parte de las autoridades, en el marco de la desconfianza, el escepticismo y el desencanto ciudadano, es la duda creciente acerca de la validez y vigencia de la democracia misma que, aparentemente, en una consideración hartamente simplista, tan amargos frutos produce ocasionando falta de interés en la participación que se adivina estéril.

En los mismos partidos se presentan dudas acerca del enfoque que deberían dar al problema de la delincuencia organizada y su concomitante violencia, así como para su eventual solución en sus posicionamientos, ante el electorado.

El Presidente Calderón reclama mayor apoyo de Estados Unidos.

Frente a los gobernadores de Texas, Nuevo México y California, el presidente **Felipe Calderón** reprochó que se pretenda que México enfrente y resuelva por sí solo el problema del narcotráfico, que tiene su origen en el mercado de drogas de Estados Unidos, que es el más grande del mundo.

“El problema del narcotráfico, que ha sido el origen y sigue siendo la principal causa de la violencia fronteriza, obedece fundamentalmente a un hecho clave: el mercado americano de drogas es el más grande del mundo. Y que siendo un problema cuyo origen está en los consumidores americanos, haya quienes pretendan que México lo enfrente y lo resuelva por sí solo”, dijo el mandatario después de sostener una reunión con ocho de los 10 gobernadores fronterizos de ambos países.

Además de **Schwarzenegger**, acudieron los gobernadores **Rick Perry**, de Texas, y **Bill Richardson**, de Nuevo México, así como **Natividad González Parás**, de Nuevo León; **Humberto Moreira**, de Coahuila; **José Reyes Baeza**, de Chihuahua; **Eduardo Bours**, de Sonora, y **José Guadalupe Osuna** de Baja California. Sólo faltaron **Janet Napolitano**, de Arizona, y **Eugenio Hernández**, de Tamaulipas.

Diputados federales de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública respaldaron el reclamo del presidente **Felipe Calderón** al gobierno de EU y exigieron a la administración de **George W. Bush** combatir a los cárteles que operan en su territorio.¹

Pareciera concertarse una coordinación latinoamericana contra el crimen.

Veinticinco países de América Latina y el Caribe se pronunciaron por endurecer las acciones para combatir y detener la distribución y oferta de sustancias prohibidas en la región, especialmente la que se lleva a cabo, vía Internet, y a través de servicios postales, pero no abundaron sobre acciones concretas para lograrlo.

Los presidentes de Colombia, **Álvaro Uribe**; México, **Felipe Calderón**; El Salvador, **Tony Saca**; Guatemala, **Álvaro Colom**; Panamá, **Martín Torrijos**; y República Dominicana, **Leonel Fernández**, así como representantes de 19 naciones más, se comprometieron a apoyarse entre sí para mejorar los métodos de control en puertos, aeropuertos y fronteras, principales filtros violados por los narcotraficantes en el momento de ingresar los estupefacientes a cada territorio.

Reunidos en la llamada Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación realizada en esta ciudad costera, ubicada a unos 650 kilómetros al norte de Bogotá, los jefes de Estado, ministros y delegados determinaron poner en marcha mecanismos de

operación conjunta como parte de un plan de acción multinacional, en el que abundan los verbos “analizar”, “promover”, “continuar” y “fortalecer”.²

Muy delicadas revelaciones del Arzobispo de Durango.

El arzobispo de la arquidiócesis de Durango, **Héctor González Martínez**, dijo que es conocido por la gente que **Joaquín El Chapo Guzmán** vive en la entidad: “Más delante de Guanaceví, pero, bueno, todos lo sabemos menos la autoridad”.

Durante la conferencia de prensa ofrecida con motivo de la visita del sacerdote jesuita **Jorge Loring**, el prelado planteó cómo están asentados los grupos delictivos en la entidad, particularmente en los municipios del sur que colindan con Zacatecas, que pertenecen a La Familia Michoacana.

“No sólo esos pueblos sino todos los pueblos de la franja que van desde San Andrés del Teul, en Chalchihuites, Súchil, Vicente Guerrero, Villa Unión, Ramón Corona, Cuauhtémoc, Allende, Victoria, toda esta franja”, mencionó.

González alertó sobre las presiones y amenazas de La Familia para los sacerdotes, así como para la población en general.³

“En realidad, el peligro, la amenaza era y es, principalmente, para los sacerdotes que están ocupados en parroquias del territorio zacatecano. Ahí es donde sucedieron los hechos y ahí es donde sigue siendo riesgoso porque ahí se está moviendo una corriente, un movimiento de lo que se llama “La Familia Michoacana”, precisó el Arzobispo.

El pasado 7 de abril, **González Martínez** reveló que ocho sacerdotes de esa zona han sido víctimas de intentos de extorsión.

Cuestionado sobre si había presentado las denuncias correspondientes, el Arzobispo dijo

estar convencido de que ese recurso no tiene resultados.

“Todos estamos muy convencidos de que no tiene mucha eficacia la denuncia” respondió.⁴

Más conexiones de políticos con narcotraficantes.

Al amanecer del 18 de enero de 2008, **Héctor Murguía Lardizábal**, ex alcalde de Ciudad Juárez, telefoneó a **Marco Antonio Torres Moreno**, quien fue su secretario de Seguridad Pública. Durante la noche anterior, **Saulo Reyes Gamboa**, al que ambos sostuvieron como director operativo de la policía municipal, había sido arrestado en El Paso, Texas, después de que intentó sobornar a un agente federal estadounidense para cruzar la frontera con una tonelada de marihuana.

Reyes Gamboa, de 37 años, fue clave en la conducción operativa de la policía —hoy bajo el control del Ejército mexicano—, pero también el principal proveedor de insumos y servicios para la administración municipal desde 1994, según consta en documentos oficiales de la misma administración y del Registro Público de la Propiedad difundidos por medios locales.

En Coacalco, estado de México, el PRD libra su propia batalla contra el descrédito. El hombre al que designó candidato para alcalde, **Alejandro Gamiño Palacios**, fue detenido en noviembre de 2005 en posesión de marihuana, cocaína y un rifle AK-47, en la céntrica colonia Morelos del Distrito Federal. “Tan sólo con ese antecedente, no debiera ser candidato”, afirma **Gustavo Hinojosa Camacho**, quien perdió por 900 votos ante **Gamiño** en la elección interna de su partido.

La polémica que acompaña a la designación de candidatos de los tres principales partidos políticos sucede a pesar de que este año se formalizó un acuerdo con el Instituto Federal Electoral para blindar el proceso selectivo. Analistas políticos consideran que no sólo el fracaso de esto es

evidente, sino que se ha dotado a la delincuencia organizada de un estatus inédito, convirtiéndola en actor principal.

El 17 de febrero de 2000, la delegación de la PGR en Jalisco emitió el comunicado B/107/00, para informar del arresto de cuatro sujetos a quienes supuestamente les decomisó 184 kilos de marihuana, una camioneta de doble tracción, una cuatrimoto y una báscula. Se les sorprendió, según el documento, en una brecha que conduce al Rancho de las Nueces, en Jilotlán de los Dolores, municipio de Tierra Caliente. Entre los detenidos estaban **Jaime** y **René Cárdenas Sánchez**, hermanos de la diputada federal **Esmeralda Cárdenas Sánchez**.

Por ese antecedente familiar, la diputada panista fue señalada por el gobernador **Jesús Silverio Cavazos Ceballos**, lo mismo que el senador de ese partido **Jesús Dueñas**, como políticos con nexos con traficantes. “Tras esa acusación falsa, yo lo que hice fue ofrecer a la opinión pública el estado de mis cuentas bancarias, y las de mi esposa”, dice en entrevista telefónica el senador. “Y con eso le callé la boca al gobernador”.

En Colima, el PAN ha desplegado una de sus más fuertes ofensivas para denostar a un candidato del PRI, en este caso a **Mario Anguiano Moreno**, quien busca ser gobernador y cuyo hermano **Humberto** fue detenido por agentes federales en junio de 2003, bajo acusaciones de distribuir metanfetaminas, marihuana y cocaína. Este tipo de imputaciones es una suerte que comparten muchos otros candidatos, entre ellos **Alejandro Gamiño Palacios**, quien antes de ser detenido en 2005 fue alcalde de Coacalco y diputado local por el PAN.⁵

Preocupantes relaciones entre guerrilleros y narcotraficantes.

A la larga y apenas perceptible guerra de baja intensidad en la sierra de Guerrero entre el Ejército y la guerrilla, se ha sumado un nuevo actor en los últimos tiempos: el narco.

El comandante **Ramiro**, uno de los mandos militares del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), le advierte a los traficantes de droga que operan en este rincón del país que “ya no vamos a permitir que sigan matando gente, vamos a investigar y actuaremos con toda la fuerza armada del pueblo, porque es un delito grave. Nosotros hemos respetado a la gente, pero si no nos respetan ya saben a lo que se atiene esta gente que manda matarnos, secuestrarnos y robar en las comunidades.

Para el guerrillero, quien concedió una entrevista a algunos medios de comunicación, los cárteles de la droga, en especial el que dirige **Joaquín El Chapo Guzmán**, están ayudando al gobierno en labores de contrainsurgencia en la región.

“Esa estrategia de combatir al narco es falsa. Aquí en Guerrero, por ejemplo, los narcotraficantes participan en las reuniones que lleva a cabo el Ejército y el gobierno del estado, golpea a un cártel y protege al otro, pero en esencia son iguales, porque asesinan, secuestran, y torturan.

Ramiro, cuyo nombre real es **Omar Guerrero Solís**, un hombre que en 2005 cavó un túnel y escapó junto con otra decena de hombres de la cárcel de Acapulco, es considerado por las procuradurías de justicia de Guerrero, Morelos y Estado de México “uno de los delincuentes más buscados del centro del país”.

“A nosotros —dice— no nos preocupa lo que diga el gobierno. Desde que me fugué de la cárcel, hace ya cuatro años, me he refugiado en la sierra de Guerrero, y creo que hemos visitado la mayoría de las comunidades de la sierra; la gente nos conoce, sabe quiénes somos, si llegamos a un pueblo y la gente está haciendo su carretera, o está sembrando nosotros les ayudamos, y de eso hay cientos de testimonios”.

La llegada de un gobernante del PRD, **Zeferino Torreblanca**, no cambió la larga guerra de baja intensidad que se vive en la sierra de Guerrero, estima el guerrillero del ERPI. “Sobre todo a partir

de este gobierno de **Zeferino Torreblanca**, han querido formar grupos paramilitares, pero cuando surgen, los ubicamos, y los hemos golpeado y desbaratado, y lo vamos a seguir haciendo, y eso lo sabe el enemigo”.

¿Y el ERPI, cómo sortea el problema del narcotráfico y la siembra de estupefacientes en las comunidades? __se le pregunta__.

No podemos negar que exista la siembra de diversos tipos de droga, cosa que no estamos de acuerdo, pero tampoco nos ponemos en contra de los campesinos.

“El pueblo le da de comer a las columnas, y nosotros, cuando se puede, les llevamos también algo de lo que les hace falta, principalmente comida y otros productos más”.

“La papa está caliente, si un día a un guerrillero lo detienen puede decir sin vergüenza que lucha por el pueblo, pero un narco nunca va a poder decir que cortó cabezas. El guerrillero puede decir con orgullo que es parte de la autodefensa armada. Queremos decirle a los jóvenes que no se dejen engañar, es mejor diez mil veces decir que son guerrilleros y no sicarios, gente sin conciencia, asesinos y torturadores...”⁶

Escandalosa excarcelación de reos peligrosos.

Sin encontrar resistencia alguna, un comando armado ingresó en la madrugada al penal de Cieneguillas, ubicado en Zacatecas y liberó a 53 reos vinculados al Cártel del Golfo-Zetas en una operación de sólo 5 minutos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron a las 4.55 horas, cuando los custodios dejaron entrar a 20 hombres a bordo de 10 camionetas presuntamente porque el grupo traía uniformes de la AFI y torretas encendidas y les dijo que iban a realizar un operativo federal.

No obstante, en una rueda de prensa ofrecida por la tarde, la Gobernadora **Amalia García** señaló que, al parecer, hubo complicidad de las autoridades del penal.

“Después de revisar los videos obtenidos de las cámaras de seguridad, instaladas tanto en el exterior como en el interior del centro de readaptación social, existen indicios de que los custodios y autoridades del penal hubieran actuado en complicidad con el grupo delictivo.

Los liberados están vinculados al Cártel del Golfo, cuyo brazo armado está integrado por “Los Zetas”.⁷

Se devela la corrupción de varios gobiernos mexicanos y su complicidad con el narcotráfico.

*En el arranque del presente año brotó y se hizo notar una sorpresiva actitud, por belicosa, de parte del PAN, a través principalmente de su presidente **Germán Martínez**, quien desde entonces ha venido manteniendo e incrementando el tono de los señalamientos, enderezados casi exclusivamente en contra del PRI, aduciendo cómo este grave problema del narcotráfico fue generado por los gobiernos de ese partido, el cual además, es acusado de no mostrar ni el más mínimo interés por contribuir eficazmente a su solución, ni en su acción legislatora a través del congreso, ni tampoco mediante la gestión de sus todavía muy numerosos e importantes gobiernos estatales y municipales.*

*Ya en otras ediciones previas de **Trama Política** hemos hecho notar la percepción en la opinión pública y, desde luego, en la oposición política, del presunto carácter "electorero" de esta posición partidista que no había sido adoptada previamente, ni en el partido ni el gobierno emanado de él, de manera sistemática*

y consistente.

Estos posicionamientos tienen sus consecuencias:

Si los señalamientos no son sostenidos con datos duros, o se perciben exagerados con el solo fin de impactar en la sociedad __considerada en su papel de electora, para lograr su favor en los comicios intermedios__, se corre el riesgo de que el combate, tan impactante por su carácter cruento que llega a contar miles de muertos anuales, pierda en alguna medida su fuerza moral, y deteriore la confianza de la ciudadanía en la pertinencia y la justeza de la estrategia adoptada.

Si, por lo contrario, los señalamientos hechos acerca de la responsabilidad de los gobiernos anteriores, en este caso, especialmente, los priístas, se sostuvieran cada día con mayor vigor y amplitud porque fueran ciertos, la pregunta obligada sería ¿por qué no se instrumentan las investigaciones necesarias para convertirlas en acusaciones judiciales concretas en contra de los principales funcionarios de los gobiernos que han sido responsables de connivencia y complicidad con el crimen organizado y que por tanto, son los causantes, en buena medida, de habernos llevado hasta esta situación tan peligrosa para el futuro del país?

*El PRI, hasta el año pasado, parecía haberse puesto de perfil ante la evidente voluntad del presidente **Calderón** de enfrentar a la delincuencia organizada con medidas antes insólitas, en enfrentamientos cada día más violentos no sólo de los policías federales, sino del Ejército, al cual se le ha asignado un papel evidentemente protagónico en este combate que cada día se parece más a una guerra por el poder de fuego que lucen los delincuentes. Sin embargo, conforme se han sentido vulnerados por las acusaciones __aún cuando se han limitado al nivel declarativo de aparente propaganda electoral__, de su complicidad con el narcotráfico, han contestado cada vez con mayor virulencia.*

Los priístas han hecho notar que nunca, previamente a esta administración, se habían tenido tantos muertos lo cual, dicen, evidencia que el problema hoy está peor que antes, __negando que fuera ya grave y que la violencia actual sea simplemente la consecuencia lógica de haber abierto la caja de Pandora, al decidir, el gobierno, suspender la permisividad reinante para tomar el toro por los cuernos__.

¿Guardias blancas en México?

El jefe operativo de El Grupo asegura:

Hacemos justicia. ¿Justicia anónima? Así tiene que ser...

El Grupo surgió hace 12 años. Empresarios, comerciantes, profesionistas, algunos académicos, todos padres y madres de familia, gente de clase media alta, alta y muy alta, ciudadanos hartos de la impunidad con que operaba la delincuencia en sus modalidades de plagio y secuestro exprés (ahora también extorsiones), decidieron, ante la incapacidad del Estado para contener la ola delictiva, organizarse.

El Grupo ha sido llamado por empresarios para operar en varias entidades de la República: al menos en una del norte, tres del centro y una más del sureste del país. Quienes financian esto tienen diversas ideologías, religiones y orígenes culturales.

“Hay excelentes policías en lo individual, pero El Grupo existe como consecuencia de las malas policías en general y de los jueces corruptos que hemos padecido, esos que liberan a un secuestrador que viola y mutila sin remordimiento alguno. Y eso no puede seguir ocurriendo en este país”, dice El Jefe, quien agrega: “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica”.

Casi todos los altos mandos policíacos federales y estatales de las regiones donde actúa El Grupo — afirma su jefe operativo— están al tanto de sus acciones: las autoridades aprecian y utilizan sus pesquisas y sus labores de inteligencia para combatir al hampa, sostiene.

Cuando estos hombres, diestros en el uso de armas cortas y largas, expertos en disciplinas de defensa personal y combate, algunos entrenados en al menos dos países, hacen sus propias detenciones e interrogatorios (que incluso filman), suelen entregar a los criminales a las autoridades.

Pero no siempre ocurre así. En ocasiones los interrogatorios de El Grupo son severos, torturantes. Y hay que decidir no sólo quién no es entregado a la autoridad, sino quién vive y quién no...

Y la gente de El Grupo parece que no es la única harta: habría al menos otros dos comandos similares e independientes operando actualmente en dos entidades, uno en el norte y otro en el centro del país. Autoridades de esos estados confirmaron los indicios que tienen al respecto. Un tercer grupo operó antes en un estado del sur, caso igualmente aceptado por funcionarios de esa entidad, quienes afirmaron que desapareció una vez que los secuestros de alto impacto desaparecieron.

Por el hartazgo ciudadano frente a la violencia, se corría el riesgo de que esto ocurriera. Ya sucedió, ya sucede: El Grupo existe. Su historia —su forma de operar, sus métodos, sus extremos, sus límites— es narrada a MILENIO con detalle por su líder operativo.⁸

Crece el fantasma del abstencionismo.

A escasas seis semanas de los comicios federales intermedios cobra fuerza la tendencia de una baja participación del electorado en las urnas de no más del 35 al 40 por ciento pero también un cambio

significativo en la composición de la Cámara de Diputados

Cinco empresas encuestadoras de prestigio en México confirmaron la expectativa de un elevado abstencionismo no menor al 60 por ciento.

En ese marco coincidieron en que el PVEM podría obtener poco más del 5 por ciento de los votos.

El promedio simple de las encuestas levantadas, a abril, por las casas encuestadoras que participaron en la mesa de las encuestas preelectorales en 2009, tendencias y metodologías, es el siguiente: El PRI obtendría el 39 por ciento de la votación nacional; el Partido Acción Nacional PAN, el 33 por ciento; el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el 18 por ciento; y el resto de los partidos pequeños alcanzaría el 10 por ciento.⁹

Sinaloa es tierra dominada por el narcotráfico.

En entrevista con EL UNIVERSAL, **Manuel J. Clouthier Carrillo**, ahora candidato, pero ya prácticamente diputado federal del blanquiazul por la vía plurinominal, reconoce que no es político, y que decidió enfrentar el reto después de ver cómo su estado natal, Sinaloa, está inmerso en un “mugrero” por el deterioro “tan grave” al “alojar a la mafia en nuestro gobierno estatal”.

El hijo de **Maquío** no titubea y asegura que su estado, gobernado por el PRI, está “totalmente” infiltrado por el narcotráfico.

Toma aire, lo contiene y lo suelta... para decir que el crimen organizado o lo administras o lo combates, y “el viejo régimen priísta lo administró, (el presidente) **Calderón** lo está combatiendo”.

Además, sostiene, en su tono entrón, como si hablara su padre, que en los mejores momentos del PRI en el que todos decían que estaba sustentado en tres grandes sectores: el popular, el campesino y el obrero... “Hoy puedo decir que hay un cuarto... el sector del narcotráfico”.

“Estoy seguro que el gobierno de Vicente Fox no hizo ni una ni otra y en este ambiente al quedar suelto aquello, le permitió al crimen organizado identificar que había una oportunidad de negociar directamente con gobernadores para ir generando espacios territoriales literalmente de mutua conveniencia”.

“El panismo que yo conocí en los tiempos de la lucha política de mi padre era un panismo generoso, la gente iba a dar no a recibir, la gente iba a ponerle no a sacarle, la gente iba con generosidad para entregarse en una lucha desinteresada por un México mejor”, comenta con extrañeza.

Hoy vemos que de esto mucho se ha ido distorsionando en una gran cantidad de militantes, producto de la llegada del PAN al poder.¹⁰

La narcoguerrilla FARC tiene ramificaciones en México.

Miguel Ángel Beltrán, alias **Jaime Cienfuegos**, presunto integrante de la comisión internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue capturado en la Ciudad de México y expulsado a Colombia, informó ayer el director de la policía de ese país, general **Óscar Naranjo**.

La detención fue posible por información obtenida en las computadoras de **Luis Édgar Devia**, alias **Raúl Reyes**, el número dos de las FARC, abatido en un bombardeo de tropas colombianas en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.

Naranjo señaló en una conferencia de prensa que el gobierno mexicano ordenó la expulsión inmediata del presunto jefe guerrillero hacia Colombia y estimó que se trata de una captura de “la mayor importancia y muestra el alcance de la inteligencia colombiana y mexicana”.

El funcionario indicó que **Cienfuegos** tiene “un perfil terrorista bastante sofisticado”. Se presume que pertenecía a grupos académicos en México y ejercía la docencia. Terminó siendo asesor del

Secretariado de las FARC (cúpula dirigente del grupo subversivo).

“Abandonó el país para incrustarse en grupos universitarios mexicanos, promoviendo la idea terrorista difundida por las FARC desde las selvas colombianas”, añadió el director de la Policía.

“Es un individuo relacionado con una nacional mexicana, la señora **Morett**, que ustedes saben ha sido objeto de una causa que se está promoviendo por su presencia en el campamento de Raúl Reyes”, añadió el jefe policiaco.¹¹

El gobierno defiende su política de seguridad pública.

La reconstrucción de las instituciones de seguridad en el país es una prioridad fundamental para recuperar la capacidad del Estado, aseguró el secretario de Gobernación, **Fernando Gómez Mont**.

Vivimos un esfuerzo de reconstrucción institucional. Estos años y este esfuerzo debe servir para poner la línea clara (de división) entre los funcionarios del Estado y los delincuentes.

Para no caer en hipótesis futuras vamos a dejar en claro algunas cosas: La reconstrucción de las instituciones de seguridad en el país es fundamental para recuperar la capacidad del Estado, para los fines para los que ha sido creado.¹²

La corrupción de políticos y funcionarios de seguridad en Morelos.

La Procuraduría General de la República posee una declaración de Alberto Pliego, quien fuera jefe de la Policía ministerial de Morelos, en la que revela que desde la Secretaría de Gobierno, en la Administración de **Sergio Estrada Cajigal**, se solicitaban “donativos” a presuntos narcos para “obras” gubernamentales a cambio de protección de los delincuentes.

Estrada Cajigal recientemente rompió con su sucesor, el panista **Marco Adame**, y tras ese cisma sobrevino una crisis de seguridad en la entidad.

Piiego, quien falleció en el penal de alta seguridad del Altiplano, donde estaba procesado por

presuntos nexos con el narco, aseguró en declaración grabada a la que tuvo acceso Reforma que **Eduardo Becerra**, segundo de a bordo del entonces Gobernador **Estrada Cajigal**, lo presionó para conseguir el dinero con los delincuentes.¹³

Las denuncias debieran sostenerse y afrontar sus consecuencias, para solucionar el problema de raíz.

*La exigencia del PRI es en el sentido de que si el gobierno cuenta con pruebas de la venalidad de sus pasadas administraciones, proceda legalmente, actitud que demostraría estar confiando, aparentemente, en que el presidente **Calderón** no se atreverá a asumir las consecuencias políticas de superar la esgrima electorera y pasar a un enfrentamiento judicial con la “familia revolucionaria”, que mantuvo el poder por 72 años del siglo pasado y que cuenta todavía con las más vastas redes de intereses en el país, abarcando a muchos gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores federales, y un buen número de legisladores locales, así como algunos prominentes miembros del mismo gabinete presidencial calderonista, con una importante influencia en el poder judicial, donde la mayoría de sus miembros provienen todavía de la época priísta, sin dejar de considerar sus relaciones filiales con todos los partidos de oposición, incluyendo al más importante de todos, el PRD, y con todos los otros institutos políticos pequeños, cuyo origen sin excepción, ha sido el mismo régimen revolucionario.*

*La situación comprometida derivada de esta realidad imposible de soslayar, ha sido paladinamente señalada por uno de los principales personeros del PRI, el jefe de su bancada en el senado, **Manlio Fabio Beltrones**, quien propuso al presidente **Calderón** incluir dentro de los gobiernos que calificó de permisivos, tolerantes y corruptos ante las bandas criminales, al gobierno panista de su antecesor, el presidente **Vicente Fox Quesada**, cuya actitud ante el narcotráfico si bien fue distinta a la del PRI, contrasta fuertemente con la posición más aguerrida y definida asumida por el presidente **Calderón**. No sólo eso sino también preguntó ¿por qué tiene (el presidente **Calderón**) como secretario de seguridad pública a **Genaro García Luna**, quien fue jefe de policía en el gobierno de **Fox**, y como Procurador General de la República a **Eduardo Medina Mora** quien fuera director del Centro de Investigaciones y de Seguridad Nacional (Cisen) y Secretario de Seguridad Pública en ese gobierno anterior, de origen panista?*

*Y podía haber agregado en la lista a **Jorge Tello Peón**, actual Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional, antes subsecretario de Seguridad Pública Federal __al comienzo de la administración de **Vicente Fox**,__ director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la Procuraduría General de la República (PGR), colaborador de **Jorge Carrillo Olea** y subsecretario de Gobernación, en gobiernos priístas; y al general **Rafael Macedo de la Concha**, ex procurador general de la República con el presidente **Fox** y actual asesor de la presidencia, ... y a muchos otros.*

*En el PRD, ninguna de las dos grandes facciones que coordinan a las corrientes internas en su seno, la liderada por **Andrés Manuel López Obrador**, y la de sus oponentes, ahora encabezada por el*

*presidente legal de ese partido **Jesús Ortega Martínez**, han asumido alguna vez una posición definida ante el narcotráfico y la delincuencia organizada. Su posición oficial es en el sentido de que no se puede combatir esta tremenda lacra, únicamente con la policía y, menos aún, con el Ejército, aceptando sin embargo, __la mayoría de las ocasiones únicamente de manera implícita__ que esta lucha es necesaria pero, dicen, también es indispensable "cambiar el modelo económico". Llegan en ocasiones a señalar, casi como causas eficientes del narcotráfico, a la pobreza y la marginación en la que se encuentran hundidos millones de nuestros compatriotas, las cuales sin duda alguna influyen, pero sin que por ello podamos concluir que los pobres, per se, sean corruptos o delinquentes, o cuando menos tengan una fuerte propensión a serlo, soslayando, la evidencia de los innumerables consentidos de la fortuna, y también letrados, que han demostrado ser peligrosos delinquentes.*

La discreción en los operativos en los Estados es necesaria, según Gobernación.

El secretario de Gobernación, **Fernando Gómez Mont**, justificó que el operativo para la detención de presidentes municipales y diversos funcionarios públicos del gobierno del Estado (de Michoacán) fue “un hecho muy delicado y de alta complejidad, por lo que era necesario comentar la información al menor número de elementos posibles, para no poner en riesgo a las personas y el éxito de la operación misma”.

Al acudir a la entidad para participar en la tercera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, **Gómez Mont** planteó que el gobierno federal y particularmente la Segob vigilarán que no se vincule la delincuencia organizada con los partidos políticos.

Aseguró que al gobernador **Godoy** “bajo ningún sentido y bajo ninguna circunstancia” se le investiga, al igual que al exgobernador, **Lázaro Cárdenas Batel**.

Sin embargo, la cúpula nacional del PRD, líderes parlamentarios, gobernadores y el jefe de Gobierno del DF, **Marcelo Ebrard**, acordaron __en una reunión en el Distrito Federal, a la que acudió **Godoy**__ solicitar de inmediato una audiencia con **Fernando Gómez Mont**, para coordinar el combate al crimen organizado, que no

haya sesgos políticos ni electorales y que se dé con respeto a la soberanía de los estados.¹⁴

La lucha se contamina con planteamientos electorales.

Líderes del PRD afirmaron que el operativo para aprehender en Michoacán a 10 alcaldes, 17 funcionarios estatales y un juez tiene fines “eminentemente electorales”.

El dirigente nacional del partido, **Jesús Ortega**, dijo que exigirán que el combate a la inseguridad no se utilice con sesgos políticos. Para **Andrés Manuel López Obrador**, la operación “huele a golpe mediático espectacular en vísperas de las elecciones”.

Por su parte, el coordinador de los senadores perredistas, **Carlos Navarrete**, mencionó que el Presidente tiene “la enorme tentación” de usar la lucha antinarco como arma política. El diputado **Juan Guerra** consideró que se trata de un acto publicitario “para fortalecer la figura mesiánica de **Calderón**; todo lo tenían preparado”.¹⁵

El gobernador Leonel Godoy acepta el operativo, a regañadientes.

Aunque es “políticamente incorrecto”, fue legal el arresto de funcionarios y alcaldes ligados con el narcotráfico, pero “es un asunto que queremos superar, hay que darle vuelta a la página”, porque

la Federación y Michoacán no pueden estar confrontados, señaló el gobernador **Leonel Godoy Rangel**.

Al finalizar la ceremonia de renovación del fuego simbólico de la libertad, en la Alhóndiga de Granaditas, el perredista michoacano afirmó que “el operativo era necesario, hay que comenzar por eliminar las relaciones o complicidad de los servidores públicos con la delincuencia, eso se debe hacer”.¹⁶

El gobernador Leonel Godoy protestó.

Entre tanto, el Gobernador de Michoacán, **Leonel Godoy**, criticó a la PGR por solicitar el arraigo de los detenidos y cuestionó que no se hubiera ejercido acción penal contra ellos, si la Procuraduría decía tener todas las pruebas para inculparlos.

“Eso se presta a “sospechosismo” porque los 40 días justo concluyen el 9 de julio (cuatro días después de las elecciones), y creo que no se vale darle tintes político-electorales (al operativo)”.

“Nadie estamos a favor de que los servidores públicos y representantes populares sean cómplices de la delincuencia organizada, pero no nos gusta esto que ocurrió”, agregó.¹⁷

Cada vez es más evidente la complicidad de funcionarios públicos con el narcotráfico.

Desde diciembre de 2006, cuando **Felipe Calderón** llegó a la Presidencia de la República, han sido detenidos 573 servidores públicos por nexos con el crimen organizado, 29 de ellos capturados hace unos días en un operativo en Michoacán, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República.

Al respecto, **Ramón Galindo**, senador del PAN y ex alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, afirmó que los municipios y sus presidentes se convirtieron “en blanco fácil, cómodo y barato

para la delincuencia organizada”, con lo que la situación que se vive en el estado gobernado por el perredista **Leonel Godoy**, se repite en varias entidades del país.

Las cifras de la PGR señalan que los 573 servidores públicos pertenecen a los tres niveles de gobierno y fueron detenidos por su presunta colaboración con la delincuencia organizada, de todos los grupos criminales que actúan en el país.

De estos 573 elementos, 373 son del ámbito de la seguridad pública municipal, 155 son ministeriales y preventivos estatales y 45 de las fuerzas federales.

En entrevista, el senador del PAN señaló que la debilidad de la institución municipal hará cada vez más difícil encontrar a candidatos que acepten ser alcaldes, “la debilidad y fragilidad de la institución municipal es tanta que es muy fácil infiltrar e influenciar” a los funcionarios públicos que por los tres años que permanece el encargo se convierte en “una invitación a la corrupción”.

Refirió que los datos sobre corrupción en los municipios no son nuevos, tras referir un documento de la ONU de septiembre pasado, en el que se afirma que 63 por ciento de éstos están infiltrados.

Mientras, el senador del PRD **Graco Ramírez** dijo que más de 12 precandidatos de su partido “renunciaron bajo amenaza porque no quisieron llegar a acuerdos con los grupos delincuenciales de Michoacán”.¹⁸

El Presidente Calderón ratifica su voluntad de combatir a los criminales.

El presidente **Calderón** aseguró que, en la administración federal, “estamos absolutamente determinados a romper las estructuras de complicidad dentro de los aparatos gubernamentales en nuestro país”.

Durante el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que se realizó en Medellín, Colombia,

el mandatario asentó: “No podemos permitir que por miedo o por razones políticas disminuya o se detenga la actividad del gobernante para combatir a los criminales (...) La peor tragedia que podemos tener es que un buen número de bandas sean integradas por policías y cuerpos encargados de dar justicia”.

En compañía de su homólogo colombiano, **Álvaro Uribe**, y más de mil participantes del congreso internacional, **Calderón** aseveró también que el secuestro en México es una modalidad de terrorismo.

Sobre este delito, tres de los principales activistas ciudadanos por la seguridad de México reprobaron la lucha que se ha emprendido en nuestro país para acabar con este crimen.

María Elena Morera, fundadora de México Unido contra la Delincuencia; **Nelson Vargas**, cuya hija fue raptada y ultimada, e **Isabel Miranda de Wallace**, quien investigó de manera personal el plagio y homicidio de su hijo, coincidieron en que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, firmado hace casi un año, no ha sido cumplido, por lo que la impunidad y la inseguridad persisten.¹⁹

Se incrementa la cooperación con Colombia.

Al recibir a **Calderón** en su casa de Medellín, **Uribe** le dedicó palabras de elogio, porque lejos de que México viva un momento difícil por la lucha contra la delincuencia, afirmó, “está en un momento espléndido” gracias a la batalla que libra **Calderón**.

En cuanto a la expulsión de **Beltrán**, ocurrida en días pasados, la cual ha generado protestas de académicos y una demanda de explicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, **Uribe** dijo a **Calderón**: “No nos cansaremos de agradecerle” por esta acción.

Sin referirse a **Miguel Ángel Beltrán** por su nombre, sino por el “alias **Jaime Cienfuegos**”,

señaló que no honra ni a Colombia ni a México que alguien funja como profesor y estudie un doctorado en sociología cuando en realidad lo que hace es estimular los explosivos, los secuestros y el narcotráfico.²⁰

El Presidente **Calderón** expresó su decisión de romper las redes de complicidad que los delinquentes tienen entre los aparatos gubernamentales y no sucumbir ante la parálisis que quieren provocar al infundir terror en la sociedad y el Gobierno.

Al clausurar en Colombia el Quinto Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, **Calderón** subrayó las razones que lo han llevado a emprender acciones contra gobernantes que presuntamente protegen al crimen organizado, como en Michoacán.²¹

Los operativos federales son necesarios.

México.- El secretario de Gobernación, **Fernando Gómez Mont**, afirmó que operativos como el aplicado en Michoacán se realizan en defensa de la política, el servicio público y los partidos. El objetivo, dijo, es eliminar cualquier margen de maniobra a las organizaciones criminales que tratan de corromperlos.

Gómez Mont aseguró que en ese trabajo se busca “no entorpecer, frustrar o inquietar innecesariamente a los gobiernos de los estados”, y lamentó que en el caso de Michoacán “algunas personas quieran cuestionar o vincular (al perredismo) con la organización criminal” La Familia.²²

La opinión pública apoya los operativos.

El espectacular Operativo Michoacán, donde se detuvo a numerosos funcionarios estatales y a diez alcaldes, se aprueba, pero causa desazón el hecho de ver el involucramiento de servidores públicos en el narcotráfico. Se respalda que el gobierno haya actuado con sigilo, pese a las protestas del gobernador. Según la última encuesta telefónica

nacional BGC-Excelsior, este golpe al narcotráfico no mejora el sentimiento de seguridad en el país ni mejora significativamente las percepciones sobre el éxito del gobierno en su lucha contra el crimen organizado.

Ampliamente conocido fue el Operativo Michoacán: 76% se enteró de lo ocurrido; 60% supo de las protestas del gobernador **Leonel Godoy**, por cómo se realizó.

Las detenciones no transmiten tranquilidad a la población. Por el contrario, provocan preocupación (65%/) y más desconfianza (50%/) que confianza en el gobierno (42%).

Sobre los motivos reales de este operativo, la mitad de la población cree que se debe a la determinación presidencial de combatir a los servidores públicos vinculados al crimen organizado. Empero, 36% lo ve como una estrategia electoral a fin de recuperar votos para el PAN.

El Operativo Michoacán transmite una imagen de fortaleza al presidente **Calderón** y al PAN, así como de debilidad al PRI y, sobre todo, al PRD y al gobernador **Godoy**.²³

La eficacia de ministerio público y policías es deplorable.

De 374 secuestradores detenidos en los dos años recientes, sólo uno está en la cárcel, lo que representa que no se ha sentenciado a 99.74 por ciento de esos criminales, reveló México Unido contra la Delincuencia con base en información de la Procuraduría General de la República

La organización civil puntualiza que de 2007 a la fecha se iniciaron 591 averiguaciones por el delito de secuestro, fueron detenidos 374 plagiarios, 41

resultaron procesados y sólo uno ha alcanzado sentencia.²⁴

Sube la resistencia de los gobernadores de la Oposición, a los operativos federales.

Un franco reclamo de parte de los gobernadores del PRD y del PRI recibió el presidente **Felipe Calderón** durante la 26 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, por la forma, argumentaron, en que se practicó el operativo del 26 de mayo en el estado de Michoacán, en la que se detuvo a una treintena de funcionarios públicos, presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Frente a esa posición, la Secretaría de Gobernación aseguró que actuó debidamente en la acción realizada en Michoacán, y señaló que “seguirá actuando en este tipo de operaciones bajo los propios criterios de seguridad que no siempre corresponden a los de los mandatarios locales”.

Precisó que en el caso de Michoacán, la reserva de la información permitió que no resultara en un operativo cruento.

Antes, en el mismo foro, el presidente **Calderón** aseguró que en esta lucha no hay lugar para titubeos, divisiones, ni deslealtades, y que quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad y sirva a criminales “no habrá fuero partidista o consideración política alguna que lo libre de la acción de la justicia”.

Aceptó que el crimen organizado se infiltró en los distintos niveles de gobierno; que claramente se está ante una grave amenaza para la sociedad, y que está en juego el futuro de la democracia en México.²⁵

El PRD, por lo que se puede apreciar, pretende mantenerse al margen de la lucha contra el narcotráfico.

*El PRD ha pasado por circunstancias complicadas como consecuencia del apoyo de buena parte de sus liderazgos visibles, incluyendo a **AMLO**, a los grupos guerrilleros, como el **EPR**, o los representantes de las **FARC** en la **UNAM**, dentro de los cuales se cuenta la señora **Lucía Morett** __quien estuvo presente y se salvó de la muerte por pura casualidad durante el ataque realizado el 1° de marzo, por las fuerzas colombianas al campamento que las **FARC** tenían en la frontera del Ecuador, en **Sucumbíos**, __ actualmente indiciada ante las autoridades de Ecuador y de Colombia, y que recientemente ha sido registrada como candidata del **PT**, con la bendición de **AMLO** y de la señora **Rosario Ibarra de Piedra**, para una diputación plurinominal. La relación de las **FARC** con el narcotráfico es ya un dato comprobado que evidencia la perversidad de este movimiento dizque revolucionario, con las formas más crueles, inhumanas y perversas de la delincuencia internacional.*

*Del mismo PRD, en las últimas fechas, se han visto en problemas provocados por el narcotráfico la gobernadora de **Zacatecas**, **Amalia García Medina**, de cuyo principal penal escaparon peligrosos narcotraficantes con la complicidad evidente de autoridades y celadores; y el gobernador de **Michoacán**, **Leonel Godoy**, a quien, de manera sorpresiva, las policías federales y el ejército, le detuvieron a diez presidentes municipales, emanados de distintos partidos, y a importantes funcionarios policíacos y judiciales del Estado.*

*El gobernador **Godoy** __haciéndose eco de la molestia y el desconcierto que sin duda han generado estas operaciones en otros Estados, como el de **Morelos**, con gobierno panista __ ha protestado en diversos tonos, a veces con energía y en otras con modos mucho más suaves y condescendientes, por la presunta violación a la soberanía estatal, porque no se le notificó previamente el plan a ejecutar. Pero, también es evidente que el gobernador **Godoy** nunca ha hecho una condena enérgica al narcotráfico, ni mucho menos ha asumido su responsabilidad por eliminar esta lacra en su Estado, y tampoco ha mostrado, en los hechos, las acciones pertinentes que le corresponderían como gobernante ajeno a componendas u omisiones inadmisibles.*

***AMLO**, __ a pesar de todos los problemas con su partido, representante oficioso de varias corrientes internas y miembro formal del PRD a despecho de su apoyo a otros dos partidos, el del Trabajo y **Convergencia**, contra los estatutos perredistas, __ nunca ha asumido una posición clara en contra de la corrupción que ha permitido el crecimiento y la penetración, tan amplias, del narcotráfico en la sociedad mexicana, no obstante que incluso algunos de sus colaboradores de otros tiempos han sido claramente señalados como culpables de estar involucrados, en diversas formas, con esta lacra. Para él la única corrupción es la de la "derecha", la de los fraudes políticos, reales o inventados, como el de 2006 acerca del cual nunca ha podido comprobar nada __ siempre denuncia los fraudes de otros partidos porque, los cometidos dentro del PRD, públicos y legalmente probados, simplemente los ha ignorado __ así como las presuntas felonías de la iniciativa privada, de los que llama potentados.*

El tema de la infiltración del narcotráfico enfrenta a los partidos políticos.

Legisladores federales del PAN, incluido el presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, **Gustavo Madero**, acusaron al Gobernador de Chihuahua, el priísta **José Reyes Baeza Terraza**, de proteger a narcotraficantes que operan en esa entidad.

Acompañada de **Madero**, así como del senador **Ramón Galindo Noriega** y los diputados federales **Carlos Reyes**, **Felipe Gonzáles Ruiz**, **María Soledad Limas Frescas** y **María Eugenia Campos Galván** y diputados locales de Chihuahua encabezados por el coordinador **Fernando Álvarez Monje**, **Ortuño** aseguró que el Mandatario chihuahuense secuestra a sus adversarios.

“En Chihuahua se secuestra a los adversarios políticos, se protege al crimen organizado y al narco”, dijo.

¿Usted avala esta acusación?, se le cuestionó a **Madero**. “En esta acción, en esta denuncia, estamos todos los legisladores de Chihuahua”, respondió.

La acusación contra el Gobernador fue hecha por los legisladores panistas por Chihuahua luego de asegurar que el candidato a diputado federal por el PAN y ex Alcalde de la capital **Juan Blanco** fue encarcelado en aquella entidad porque representa un adversario político para el PRI.

¿Cómo se explican 3 mil asesinatos sin personas en la cárcel? ¿Cómo se explica ser el primer lugar nacional en robo de autos? ¿Cómo se explica tener el primer lugar en secuestros y no tener delincuentes, que hieren y lastiman a los chihuahuenses, en la cárcel?, cuestionó **Ortuño**.²⁶

También hay tensiones entre las fracciones parlamentarias.

A fuego cruzado, las tres principales fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (PAN, PRI y PRD) se trabaron en un agrio debate cuyo eje fue la narcopolítica, y reprocharon el manejo del combate al crimen organizado con fines electoreros, sobre todo en Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz.

El duro señalamiento que hizo la víspera el presidente **Felipe Calderón** en el sentido de que “México está pagando los costos de años de permisividad y tolerancia de autoridades corruptas ante las bandas criminales”, recibió la respuesta del jefe de la bancada del PRI en el Senado, **Manlio Fabio Beltrones**, quien le propuso al mandatario incluir al gobierno de **Vicente Fox**, en la lista de gobiernos que supuestamente auspiciaron al narco.

Apenas un día antes, el líder panista **Germán Martínez** había acusado al neoleonés y priísta **Natividad González Parás** de ser permisivo con el crimen organizado.²⁷

Ante las evidencias de connivencia en los Estados, con el narcotráfico, algunos gobernadores parecieran escurrir bulto.

La administración de **Felipe Calderón** y su partido, el PAN, utilizan la lucha contra el crimen organizado con fines político-electorales, afirma el gobernador **Leonel Godoy Rangel**; por eso reclama que el combate a la delincuencia “debe ser política de Estado, no una posición facciosa del gobierno”.

Con esos propósitos “electoreros”, agrega, mediáticamente se ha tratado de imponer un modelo a conveniencia de los panistas, en el que “los triunfos son para el gobierno federal y las complicidades de estados y municipios”.

Godoy sostiene: “no podemos permitir que nos impongan como único tema de la agenda nacional el combate a la delincuencia y el uso de la fuerza pública para lograrlo”. Y se pregunta: “¿Y el desempleo?, ¿y el combate a la pobreza? ¿y la situación de crisis económica?”.

“Nos hemos cansado de decir que no se puede combatir a la delincuencia sólo con el uso de la fuerza pública. Deben utilizarse otras alternativas, como el combate a la pobreza y a las adicciones, la inversión en cultura y educación, generando fuentes de empleo y condiciones para la inversión... reivindicamos eso desde nuestro proyecto de izquierda. No se derrotará a la delincuencia sólo con el uso de la fuerza pública y violando la Constitución.”²⁸

El narcotráfico pretende organizar grupos para defenderse mediante conflictos sociales inducidos.

Habitantes de 11 municipios de Michoacán reiteraron su amenaza de boicotear las elecciones del próximo 5 de julio si no se deja en libertad a los 10 alcaldes detenidos el pasado 26 de mayo por presuntos vínculos con bandas del narcotráfico.

“Si no hay solución, no habrá votación... Si no hay solución, no habrá elección... En Michoacán las urnas no pasarán...”, fueron algunas consignas lanzadas por inconformes de ese estado, quienes buscan la liberación de los alcaldes.

En ese sentido, el coordinador general de municipios, **Ricardo Salas**, comentó que de ser necesario realizarán en los próximos días una campaña para inhibir el voto en esa entidad.

Más de 6 mil michoacanos marcharon del Monumento a la Revolución a dos destinos. El primero fue la SIEDO y el segundo la sede del Senado, donde exigieron la renuncia de los titulares de la PGR y la SSP federal, **Eduardo Medina Mora** y **Genaro García Luna**, respectivamente.

También manifestaron su repudio al presidente **Felipe Calderón**, a quien acusaron de “traicionar a sus paisanos”. También indicaron que el jefe del Ejecutivo les “declaró de la guerra”.

En la movilización participaron habitantes de los municipios de Tumbiscatío, Uruapan, Arteaga, Tepalcatepec, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Aguila, Apatzingán, Coahuayana, Buenavista y Zitácuaro.²⁹

El PRI pretende endosar la responsabilidad del narcotráfico al PAN.

La inseguridad que vive Chihuahua inició cuando el PAN estaba al frente del Gobierno estatal, con el entonces **Mandatario Francisco Barrio**, denunció **Beatriz Paredes**, presidenta nacional del PRI.

En entrevista con Reforma, la lideresa respondió así a las acusaciones de senadores panistas contra el Gobernador de Chihuahua, el priísta **José Reyes Baeza**, quien, aseguraron, ha protegido el crimen organizado en la entidad.

“Hay que recordar que Chihuahua estuvo gobernado por un panista, el señor **Francisco Barrio**. Hay que recordar que Ciudad Juárez, que es el Municipio en el que la problemática es mucho más severa, estuvo gobernado también por Presidentes Municipales panistas”, acusó.

La candidata a diputada federal criticó de manera particular las acusaciones de la senadora del blanquiazul **María Teresa Ortuño**, respaldada por el líder de los panistas en la Cámara alta, **Gustavo Madero**, quien sostuvo que, por acción u omisión, **Baeza** es protector de narcotraficantes y secuestradores.³⁰

Pareciera que la intervención del Ejército es indispensable.

Guillermo Dillón Montaña, director de la Cámara de la Industria de Transformación en

Nuevo León —gremio que representa a 80 por ciento de las empresas de la entidad, desde micronegocios hasta influyentes grupos como Alfa, Cemex, Femsa, Vitro y British American Tobacco—, apremió: “Pedimos el involucramiento del Ejército para que dirija los rumbos de la seguridad pública en Nuevo León”.

Entrevistado por separado, **Marcelo Canales Clariond**, presidente de la Coparmex en la entidad, reconoció: “A raíz de los acontecimientos de las últimas semanas hay preocupación entre nuestros agremiados”.

A su vez, **Julio Cepeda Viramontes**, presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey (Canaco), advirtió que “está más que de manifiesto que la autoridad (estatal) ha sido rebasada en materia de seguridad y debería buscarse una mejor y mayor coordinación con la autoridad federal”. El líder de los comerciantes destacó: “La visita del Ejército al estado es una forma amigable, no es enemigo”.

Por su parte, **José Mario Garza Benavides**, director de Coparmex Nuevo León, demandó un castigo para los uniformados que protestaron armados. “No es posible permitir una manifestación de esa naturaleza. Debe haber

consecuencias graves para quienes participan en estos hechos”, urgió.³¹

Pretenden acallar y atemorizar a los comunicadores, asesinándolos.

El líder de la célula de Los Zetas en Durango y Coahuila, **Lucio Fernández**, El Lucifer, ordenó el homicidio del periodista **Eliseo Barrón Hernández**, de La Opinión MILENIO, ocurrido el pasado 25 de mayo. El propósito era dar un “escarmiento” a los comunicadores de la comarca lagunera para que no publicaran información sobre las actividades delictivas de ese cártel.

Por estos hechos fueron detenidos **Israel Sánchez Jaimes**, quien confesó ser el autor material del homicidio, además de **José Pedro Jáuregui Jiménez**, **Raúl Francisco Rodríguez Valderrama**, **Víctor Alfredo López Ramírez** y **Óscar Cárdenas Castillo**.

Sánchez Jaimes admitió también haber asesinado —por órdenes de El Lucifer a **Martha Correa Alvarado**, subdirectora de Servicios Periciales de Gómez Palacio.³²

El narcotráfico es un problema de Estado cuya solución requiere de la previa conciliación de la nación y de un liderazgo eficaz que la conduzca.

De este somero repaso de algunos de los problemas generados por el narcotráfico en México, en el ámbito político, bien se puede apreciar su enorme peligrosidad y la necesidad ineludible de continuar y fortalecer la lucha para erradicarlo, para solucionarlo de fondo, sin concesiones, so pena de poner en un grave riesgo el futuro del país.

Desde luego, las repercusiones políticas del impacto de la violencia que padecemos sobre las elecciones intermedias no deja de ser importante, porque se ha generado un ambiente de zozobra, temor y confusión que lesiona la confianza de la ciudadanía en el gobierno y, en general, en las instituciones nacionales, ante la evidencia, profusamente propalada, de la complicidad de algunas de las autoridades con la delincuencia organizada, en particular con el narcotráfico.

Pero estos efectos sobre el próximo proceso electoral, siendo importantes, no son sino indicios, síntomas de la existencia de una calamidad mucho mayor: el cáncer que padecemos por la profunda corrupción de nuestros cuadros dirigentes, de nuestros políticos, de los líderes sociales y políticos que se han prestado

para formar parte de una red delictiva cuyos intereses representan un obstáculo formidable para su disolución, al grado de que frecuentemente se aprecia como casi insalvable. La delincuencia organizada se opone al verdadero desarrollo del país, el cual supone la necesaria culminación del proceso de la transición mexicana que, tal como lo hemos analizado en numerosas ocasiones, incluye los campos sociales, culturales, económicos y, sobre todo, políticos, que deben ser renovados.

La evolución que se requiere supone, en el fondo, un proceso cultural, que retome los valores judeo cristianos __que en el rico proceso de nuestro mestizaje, han empapado, depurado y asumido las mejores virtudes de la otra vertiente de nuestras raíces, la indo americana__ tradicionales, de nuestro pueblo, asumiéndolas, acrisolándolas y enriqueciéndolas, para informar un nuevo orden político, un nuevo sistema que comprenda: el respeto por las personas, por su vida, por sus bienes; especialmente los derechos de los niños, de las mujeres, de los ancianos, y la consideración de todos como hermanos __por encima de su situación económica o social, su fe religiosa, y sus raíces étnicas__, el celo por la justicia para todos, sin dejar de lado, ni siquiera posponer, la justicia social que corresponde a los muchos pobres y marginados; la solidaridad, en un ambiente de libertad garantizado por una sociedad en paz, en el marco de un Estado de derecho, donde se respete la subsidiariedad que mantiene a salvo los derechos de asociación y participación estructurada y organizada de la sociedad, para la definición del rumbo del país, haciendo efectiva la posibilidad democrática por la que hemos optado.

Para vencer a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a las raíces que les dan sustento, se necesita un consenso social. La natural polémica adversaria de los partidos tendría que salvar, previamente, su posición patriótica para combatir esta lacra __que lastima a todos los mexicanos, independientemente de su filiación partidista __ con todas sus fuerzas, su determinación, y su peso institucional.

Todos, sin excepción, gobernantes, parlamentarios, líderes sociales y gremiales, de los Medios de comunicación, y religiosos, deberían apoyar, incondicionalmente, al presidente de la nación que se ha atrevido a emprender, por parte de uno de los Poderes de la Unión, el Ejecutivo, una lucha que es necesaria y que era impostergable, por encima de los naturales y legítimos intereses de los partidos, de los sectores sociales y de las diferentes banderías ideológicas en el país.

No deja de ser triste observar la aparente mezquindad con la que en ocasiones operan los partidos políticos y los líderes representantes de ellos, y buena parte de los abanderados sociales, al anteponer sus particulares intereses al bien común de la nación.

Todos debiéramos estar comprometidos en una cruzada nacional: para eliminar a las mafias que se han apoderado del país, que secuestran, torturan y explotan a los migrantes centroamericanos y a nuestros connacionales que se arriesgan a intentar una nueva fórmula para sostener honradamente a sus familias, en el norte, más allá de nuestras fronteras, donde tienen la esperanza de encontrar oportunidades que les son negadas en su propia tierra; para castigar y erradicar a los descastados que secuestran, torturan, mutilan y asesinan a sus indefensas víctimas en calvarios infames; para poner en su lugar a las bandas de narcotraficantes que se sienten dueñas del país. Una vez salvado este compromiso con la nación, la promoción y defensa de las diferentes plataformas partidistas resultaría válida, pero no antes.

Si los mexicanos, finalmente, no fuéramos capaces de jerarquizar debidamente nuestros objetivos políticos poniendo por encima de cualquier otra consideración el bien común de la nación, correríamos el riesgo de perder, una vez más, la oportunidad histórica de encontrar nuestra propia ruta del desarrollo y por ende, de la felicidad de nuestro pueblo, como ya ocurrió en nuestra guerra de Independencia, las guerras de

Reforma, nuestra famosa Revolución Mexicana, y la llamada Guerra Cristera, sin dejar de lamentar e incluir, en esta breve y simplificada enumeración, los tanteos hasta ahora fracasados para construir nuestro propio proceso de transición política hacia la democracia y, simultáneamente, nuestra inserción exitosa en la globalización.

Ciertamente, resultaría inadmisibile que la presidencia de la nación y su gobierno adoptaran posiciones partidistas en el desempeño de su función pero, igualmente reprobable sería que la sociedad y sus instituciones políticas y sociales regatearan el apoyo debido al presidente de todos los mexicanos, cuando está empeñado en resolver la derrota de los grupos mafiosos, de la delincuencia organizada que pretenden someter al pueblo a su capricho preservando la impunidad de la que han gozado hasta ahora, a través de sus múltiples y numerosos cómplices que han traicionado sus altas responsabilidades políticas para ponerse a su servicio.

*Son innegables algunas fallas en las que ha incurrido el gobierno del presidente **Calderón**, mismas que debemos exigirle se corrijan pero, en medio de la tormenta, no es válido regatear el apoyo al mandatario que democráticamente ha recibido nuestra encomienda para liderar al país durante su gestión, __por cierto, limitada en el tiempo y en sus modalidades por la ley,__ cuando no hay otra opción viable, fuera de una quimérica revolución como la que padecemos hace 100 años, con el precio de la pérdida de nuestras oportunidades de desarrollo durante un largo siglo; o peor aún, medio siglo antes, con la pérdida de la mitad de nuestro territorio como costo de nuestras, lamentablemente, insolubles desavenencias de esa época aciaga.*

Claves del documento

Exposición sintética del tema

- *Opiniones*
- Hechos
- **Actores**

Notas al final del documento

¹ Lorena López, Fernando Damián y Mauricio Juárez, Milenio, 30 de mayo del 2008.

² Cintya Contreras, Excélsior, 2 de agosto del 2008.

³ Redacción e Ignacio Alzaga, Milenio, 18 de abril del 2009.

⁴ Reforma/Staff, 18 de abril del 2009.

⁵ Ignacio Alvarado Álvarez, El Universal, 5 de mayo del 2009.

⁶ Diego Enrique Osorno, Milenio, 16 de mayo del 2009.

⁷ Reforma/Staff, 17 de mayo del 2009.

⁸ Juan Pablo Becerra Acosta, Milenio Diario, 18 de mayo del 2009.

⁹ Eduardo Ortega, El Financiero, 19 de mayo del 2009.

¹⁰ Horacio Jiménez, El Universal, 21 de mayo del 2009.

¹¹ Bogotá, Redacción, Excélsior, 23 de mayo del 2009.

¹² Entrevista al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de Francisco Garduño, Milenio, 25 de mayo del 2009.

¹³ Reforma/Staff, 26 de mayo del 2009.

¹⁴ Arturo Estrada-Finsat/Rivelino Rueda, El Financiero, 28 de mayo del 2009.

¹⁵ Francisco Reséndiz y Azucena Silva, El Universal, 28 de mayo del 2009.

¹⁶ Carlos García, La Jornada, 29 de mayo del 2009.

¹⁷ Benito Jiménez y Adán García, Reforma, 30 de mayo del 2009.

¹⁸ Elba Mónica Bravo y AFP, Milenio, 31 de mayo del 2009.

¹⁹ Ivonne Melgar, Excélsior, 31 de mayo del 2009.

²⁰ Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 31 de mayo del 2009.

²¹ Roberto Zamarripa, Reforma, 31 de mayo del 2009.

²² Mauricio Pérez, Milenio, 1º de junio del 2009.

²³ Alejandro Cruz, Excélsior, 1º de junio del 2009.

²⁴ Zenyazen Flores, Milenio, 3 de junio del 2009.

²⁵ Sergio Jiménez y Alberto Morales, El Universal, 3 de junio del 2009.

²⁶ Armando Estrop, Reforma, 4 de junio del 2009.

²⁷ Rivelino Rueda, El Financiero, 4 de junio del 2009.

²⁸ Gladys León, La Jornada, 4 de junio del 2009.

²⁹ Zenyazen Flores, Milenio, 4 de junio del 2009.

³⁰ Claudia Guerrero, Reforma, 5 de junio del 2009.

³¹ Milenio Monterrey, 10 de junio del 2009.

³² Rubén Mosso, Milenio, 13 de junio del 2009.